

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando en parte el actual recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en nombre y representación de la Entidad demandada «Casino Monte Picayo, Sociedad Anónima», frente a la demandada Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 2 de octubre de 1984, a la que la demanda se contrae, debemos declarar y declaramos no ser en parte conforme a derecho y, por consiguiente, anulamos en parte la referida resolución económico-administrativa impugnada; manteniendo la misma en cuanto ordena que por el Delegado de Hacienda de Valencia se ordene en vía de gestión tributaria la comprobación administrativa pertinente de la autoliquidación producida por la Entidad hoy recurrente, produciendo la definitiva correspondiente, que deberá ser reglamentariamente notificada a aquélla, con devolución -en su caso- a esta última de lo que hubiera indebidamente ingresado al hacer su autoliquidación por la tasa de referencia; todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.»

Lo que digo a V. I.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 28 de abril de 1986.-P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

14121 *ORDEN de 30 de abril de 1986 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 23 de abril de 1982 por la Audiencia Nacional en recurso contencioso-administrativo número 21.813, interpuesto por «Azar menor, Sociedad Anónima», por el concepto de Tasa Fiscal sobre el Juego.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 23 de abril de 1982 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 21.813, interpuesto por «Azar menor, Sociedad Anónima», representado por el Procurador don Pedro Antonio Pardillo Larena, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 22 de enero de 1981 por la Tasa Fiscal sobre el Juego.

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos que desestimando el recurso de apelación formulado por el Procurador señor Pardillo Larena en la representación que ostenta, confirmamos la sentencia de la Audiencia Nacional (Sección Segunda) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de fecha 23 de abril de 1982, por estar ajustada a Derecho. Sin costas.»

Lo que digo a V. I.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 30 de abril de 1986.-P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

14122 *ORDEN de 30 de abril de 1986 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 14 de abril de 1985 por la Audiencia Nacional en recurso contencioso-administrativo número 24.027, interpuesto por «Filmayer, Sociedad Anónima», por el concepto de Tasa Permiso de Doblaje, Subtitulado y Exhibición en versión original de Películas Extranjeras.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 14 de abril de 1985 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 24.027, interpuesto por «Filmayer, Sociedad Anónima», representada por el Procurador señor García San Miguel, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 11 de enero de 1983, por la Tasa Permiso de Doblaje, Subtitulado y Exhibición en versión original de Películas Extranjeras, con cuantía de 7.260.000 pesetas.

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos que desestimando el actual recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor García San Miguel, en nombre y representación de la Entidad «Filmayer, Sociedad Anónima», frente a la demandada, Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, contra las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de 11 de enero de 1983, y del Tribunal Económico Administrativo Provincial de Madrid de fecha 21 de diciembre de 1981, así como contra la liquidación tributaria a que las anteriores se refieren, y a la que la demanda se contrae, debemos declarar y declaramos ser conformes a Derecho y, por consiguiente, mantenemos los referidos actos administrativos al presente combatidos, todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en costas respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.»

Lo que digo a V. I.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 30 de abril de 1986.-P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

14123 *ORDEN de 30 de abril de 1986 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 19 de abril de 1985 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 24.055, interpuesto por «Cinema International Corporation» por el concepto de Tasa Permiso de Doblaje, Subtitulado y Exhibición en versión original de Películas Extranjeras.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de abril de 1985 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 24.055, interpuesto por «Cinema International Corporation», representado por el Procurador señor García San Miguel, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 14 de diciembre de 1982, por la Tasa Permiso Doblaje, Subtitulado y Exhibición en versión original de Películas Extranjeras, con cuantía de 1.835.000 pesetas.

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos que desestimando el actual recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor García San Miguel, en nombre y representación de la Entidad «Cinema International Corporation», frente a la demandada, Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, contra las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de 14 de diciembre de 1982 y del Tribunal Económico Administrativo Provincial de Madrid de fecha 30 de junio de 1981, así como contra la liquidación tributaria a que las anteriores se refieren, y a la que la demanda se contrae, debemos declarar y declaramos ser conformes a Derecho y, por consiguiente, mantenemos los referidos actos administrativos al presente combatidos; todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en costas respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.»

Lo que digo a V. I.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 30 de abril de 1986.-P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

14124 *ORDEN de 30 de abril de 1986 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 19 de abril de 1985 por la Audiencia Nacional en recurso contencioso-administrativo número 24.061, interpuesto por «Cinema International Corporation» por el concepto de Tasa Permiso de Doblaje, Subtitulado y Exhibición en versión original de Películas Extranjeras.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de abril de 1985 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 24.061, interpuesto por «Cinema International Corporation», representado por el

Procurador señor García San Miguel, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 14 de diciembre de 1982, por la Tasa de Permiso de Doblaje, Subtitulado y Exhibición en versión original de Películas Extranjeras, con cuantía de 14.080.000 pesetas.

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos que desestimando el actual recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor García San Miguel, en nombre y representación de la Entidad "Cinema International Corporation", frente a la demandada, Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, contra las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de 14 de diciembre de 1982 y del Tribunal Económico Administrativo Provincial de Madrid de fecha 30 de junio de 1981, así como contra la liquidación tributaria a que las anteriores se refieren, y a la que la demanda se contrae, debemos declarar y declaramos ser conformes a Derecho y, por consiguiente, mantenemos los referidos actos administrativos al presente combatidos; todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en costas respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.»

Lo que digo a V. I.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 30 de abril de 1986.-P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Hmo. Sr. Director general de Tributos.

14125 *CORRECCION de erratas de la Orden de 5 de marzo de 1986 por la que se establece la parte de recibo de prima a pagar por los asegurados y la subvención de la Administración para el Seguro Combinado de Viento y Pedrisco en Avellana Plan 1986.*

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», número 69, de fecha 21 de marzo de 1986, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 10730, segunda columna, Segundo.-, segundo párrafo, quinta línea, donde dice: «nes de Agricultores», en su caso, las Cámaras Agrarias, siempre que», debe decir: «nes de Agricultores, en su caso, las Cámaras Agrarias, siempre que todas ellas».

14126 *RESOLUCION de 14 de mayo de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de fecha 14 de enero de 1986 por el que la Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo formula consulta en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo del artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.*

Visto el escrito de fecha 14 de enero de 1986 por el que la Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo formula consulta en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo del artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre;

Resultando que la referida Asociación es una Organización patronal;

Resultando que «Butano, Sociedad Anónima» encomienda a las Empresas distribuidoras encuadradas en dicha Asociación la venta y distribución de los gases licuados y sus mezclas en régimen de comisión mercantil;

Resultando que las Empresas distribuidoras asumen, entre otras, las siguientes obligaciones frente a «Butano, Sociedad Anónima»:

Tramitar la formalización de los documentos que se establezcan entre «Butano, Sociedad Anónima» y sus clientes.

Poner a disposición de los clientes el gas envasado en su domicilio.

Cobrar al contado el precio de los suministros de gas y demás elementos suministrados asumiendo el riesgo de cobranza.

Hacer efectivo a «Butano, Sociedad Anónima» el importe del gas en el momento de retirarlo de las plantas de esta Entidad.

Hacer efectivo a «Butano, Sociedad Anónima», en el momento de su recepción, el importe correspondiente a los demás materiales, equipos y elementos que, siendo propiedad de «Butano, Sociedad Anónima», se facilitan a los usuarios.

Montar las instalaciones de alimentación en los domicilios de los usuarios.

Inspeccionar las instalaciones de los usuarios.

Atender las solicitudes por averías.

Facilitar a los usuarios instrucciones escritas facilitadas por «Butano, Sociedad Anónima».

Por la prestación de los anteriores servicios los distribuidores de gas perciben de «Butano, Sociedad Anónima» diversas comisiones;

Resultando que «Butano, Sociedad Anónima» vende a las Empresas distribuidoras accesorios tales como reguladores, gomas y abrazaderas que los distribuidores revenden al usuario a un precio de venta fijado por «Butano, Sociedad Anónima»;

Resultando que los distribuidores de gases licuados perciben en ocasiones determinadas contraprestaciones por efectuar servicios de cambios de materiales o comprobación de averías;

Resultando que, con fecha 13 de mayo de 1986, se aportan al expediente dos clases de modelos de facturas expedidos habitualmente por las Empresas distribuidoras de gas. En uno de los modelos se consigna el número de identificación fiscal de «Butano, Sociedad Anónima» como emisor y el sello de la agencia distribuidora. En el segundo modelo se consigna únicamente el código de identificación fiscal del distribuidor y su nombre, así como el anagrama de «Butano, Sociedad Anónima», pero no su número de identificación fiscal;

Resultando que se consulta el régimen de tributación de las operaciones descritas y, en especial, si resulta de aplicación en algún caso el régimen especial del recargo de equivalencia;

Resultando que, asimismo, son objeto de consulta determinadas obligaciones formales derivadas de las normas reguladoras del Impuesto sobre el Valor Añadido y de otras disposiciones de carácter general;

Considerando que en virtud del artículo tercero de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, están sujetas al citado tributo las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional;

Considerando que, en aplicación del artículo sexto, número 2, apartado octavo, de dicha Ley, tendrán la consideración de entregas de bienes, entre otras prestaciones, las transmisiones de bienes entre comitente y comisionista que actúe en nombre propio efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta o de comisión de compra;

Considerando que la determinación de si los comisionistas actúan en nombre propio o en nombre y por cuenta de los clientes es una cuestión de hecho que podrá probarse en cada caso por los medios admisibles en derecho;

Considerando que se entenderá probado que las Empresas distribuidoras comisionistas actúan en nombre y por cuenta de «Butano, Sociedad Anónima» cuando, con la debida autorización, emitan las facturas en nombre de su comitente, con la secuencia numérica del mismo y haciendo constar la denominación y el número de identificación fiscal del comitente como emisor de dichas facturas.

Dicha circunstancia parece concurrir en uno de los modelos de facturas aportados al escrito de consulta;

Considerando que, según lo preceptuado en el artículo 17 de la citada Ley, la base del Impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo, incluyendo cualquier crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste el servicio derivado, tanto de la prestación principal como de las accesorias a la misma;

Considerando que, en relación con los diversos bienes o servicios a que se refiere el escrito de consulta el Impuesto se exigirá al tipo general del 12 por 100 establecido en el artículo 27 de su Ley reguladora;

Considerando que, de acuerdo con el artículo 14 de la misma Ley se devengará el Impuesto por regla general cuando los bienes entregados se pongan a disposición de los clientes o los servicios se presten.

No obstante, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente cobrados.

Dichas reglas serán de aplicación incluso respecto de los servicios de inspección técnica;

Considerando que el artículo 142 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido establece que el régimen especial del recargo de equivalencia se aplicará a los comerciantes minoristas que sean personas físicas y comercialicen al por menor artículos o productos de cualquier naturaleza no exceptuados en el número 2 de dicho precepto;

Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido a los efectos de este régimen especial se considerarán comerciantes minoristas los sujetos pasivos en quienes concurran los siguientes requisitos:

Primero.-Que realicen con habitualidad ventas de bienes muebles o semovientes sin haberlos sometido a proceso alguno de